

Descifrando la treceava estela

Armando Bartra*

* *Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya AC, miembro del Comité Editorial de la revista Chiapas.*

iCaracoles!

Por si las dudas, las comunidades zapatistas del sureste mostraron de nuevo que ahí la resistencia va para largo. Durante más de dos años y hasta mediados de 2003, del Chiapas rebelde llegaban principalmente noticias del acoso militar a los municipios autónomos y de conflictos entre zapatistas y no zapatistas, todo englobado en una contrainsurgencia que resultaba más ominosa a falta de cualquier otra cosa. La movilización del 1ro de enero en San Cristóbal, y la inauguración de los Caracoles, en agosto, documentaron el lado luminoso de las autonomías de hecho: la capacidad de los pueblos para organizar la vida toda, no en una comunidad, en un extenso territorio. Ámbito que se extiende sobre cerca de 600 comunidades de los Altos, la Selva y la zona Norte ubicadas en 35 de los municipios Constitucionales de Chiapas.

La noticia que puso al zapatismo de nuevo a la ofensiva fue que "los pueblos indígenas... organizados en el EZLN

han preparado una serie de cambios que se refieren a su comportamiento interno y a su relación con la sociedad civil" (Comunicado CCRI-CG EZLN, 19 de julio de 2003). Las mudanzas van en el sentido de consolidar la autogestión en escala regional a través de cinco Juntas de Buen Gobierno (JBG) encargadas de manejar la relación con las entidades fraternas y de supervisar a los consejos municipales. Esto significa que el acceso de la solidaridad a los municipios ya no será a través del EZLN, sino de las JBG, aunque las iniciativas políticas hacia afuera seguirán requiriendo autorización de la comandancia. Es decir, que con las JBG los municipios autónomos se autonomizan parcialmente del EZLN, pues ahora la instancia político-militar se limitará a "vigilar" las juntas y de ser necesario defender a la población; en lo demás, la instancia civil se mandará sola. En contraparte, todo hace pensar que el EZLN intensificará su activismo más allá de Chiapas y los pueblos indios.

Aunque trascendente, la reorganización interna no es en sí misma un viraje. Dijo bien el Congreso Nacional Indígena (CNI) en la inauguración del Caracol de Oventic: se trata de "consolidar y profundizar" un proceso autonómico de hecho que lleva rato. Los municipios zapatistas de las cañadas tienen más de siete años, mientras que la decisión de practicar los Acuerdos de San Andrés, desconociendo el adefesio legislativo del Senado y sin esperar a que la Ley Cocopa sea constitucional, fue tomada por el CNI desde mediados de 2001. En esta tesitura, en octubre del mismo año ocho comunidades indias del Distrito Federal y del Estado de México hicieron una Declaratoria de Bienes Comunales y de Autonomía, y siete de Michoacán firmaron un Decreto del Pueblo Purépecha, de mismo talante. Decisiones donde se prolonga una lucha por las autonomías, que tiene cuando menos un cuarto de siglo de impulsarse adrede y más de quince años de llamarse así. Pero la libre determinación no es exclusiva de los pueblos originarios; con diferentes nombres, ha sido reivindicada por diversos movimientos sociales.

En el México del siglo XX el Estado omnipresente y todopoderoso creó a la sociedad civil a su imagen y semejanza. En un país donde los gobiernos posrevolucionarios imprimían a las organizaciones sociales y ciudadanas un fuerte sesgo corporativo, la lucha por autodeterminarse fue siempre asunto de primera necesidad, y en la segunda mitad de la centuria pasada su ascenso coincidió con el progresivo descrédito del sistema político. De los '50 a los '70, la palabra "independiente" fue emblema de la oposición democrática: centrales campesinas "independientes", movimientos por la "independencia" sindical, partidos que se definían por ser "independientes" del poder público, periódicos y revistas "independientes" que no cobraban en la Secretaría de Gobernación. Más tarde, en el último cuarto del siglo, la voz de orden es "autonomía", que rechaza las servidumbres políticas –como el término "independencia"– pero alude también a la autogestión económica y social: los campesinos "autónomos" rechazan la tutoría estatal y se "apro-

“Las autonomías indias [...] radicalizan aun más el planteamiento: porque implican la libre determinación política pero también porque al remitir a la historia su legitimidad [...] fundan su demanda en un derecho anterior al Estado nacional vigente, y en cierto sentido exterior al sistema social hegemónico”

pian del proceso productivo”, mientras que barrios y comunidades se organizan en torno la dotación autogestionaria de servicios básicos. Las autonomías indias, que se reivindican expresamente desde fines de los '80, radicalizan aun más el planteamiento: en primer lugar porque implican la libre determinación política –el autogobierno–, pero también porque al remitir a la historia su legitimidad –se trata de pueblos originarios– fundan su demanda en un derecho anterior al Estado nacional vigente, y en cierto sentido exterior al sistema social hegemónico.

Al transitar de la independencia política a la autogestión socioeconómica, y de ahí al autogobierno, el concepto de autonomía robustece su sentido de alteridad. Si en un primer momento es un comportamiento sistémico, un modo insumiso de insertarse en el orden existente, en su forma más acabada es un comportamiento anti-sistémico: un modo de resistir, construyendo órdenes alternos desde abajo y a contrapelo. Así, de repeler visceralmente la política unánime, se pasa a la contra-política y de ahí a la anti-política, pero siempre en el modo del catalejo: la forma superior lo es en tanto que conserva, trascendiéndolas, las formas anteriores, sin gremios independientes que reivindiquen lo básico aquí y ahora, sin organizaciones autogestivas que operen producción y servicios populares lidiando cotidianamente con Estado y mercado, sin partidos institucionales capaces de impulsar programas alternativos desde la oposición o el gobierno y en todas las esferas. Sin ellos no sobrevivirán tampoco las experiencias autonómicas más radicales, laboratorios de altermundismo que miren al futuro pero con los pies bien puestos en el presente. Porque sin posibilismo no hay utopía. Porque es bueno ser realistas exigiendo lo imposible, pero también ser utópicos consiguiendo lo posible aquí y ahora.

La autogestión que resiste al autoritarismo es una consigna de prosapia en el siglo XX mexicano, pero en Chiapas adopta formas peculiares, que se describen en la quinta sección de la treceava estela. En primer lugar porque ahí se trata de las bases civiles de una organización militar

que se alzó contra el mal gobierno y formalmente sigue en guerra. En segundo lugar, porque al ser “territorio en rebeldía” no hay “apoyo institucional alguno”, y sí “persecución y hostigamiento”, siendo forzoso autoproverseer de educación, salud, vivienda y alimentación (servicios que en otros ámbitos pueden ser reclamados de las instancias públicas), resolver asuntos de tierra, de trabajo y de comercio, y administrar justicia, todo lo cual genera “constante fricción y enfrentamiento” con las comunidades no zapatistas que comparten el territorio, pues éstas participan a la vez de la vida institucional convencional y de la administración rebelde. En tercer lugar porque, para enfrentar la situación y poder seguir en lucha, el zapatismo cuenta con el apoyo solidario de “cientos de miles de personas” de la sociedad civil.

Ser operada por las bases no armadas de un ejército, en un territorio en rebeldía y con el apoyo de la sociedad civil, hace de la zapatista una autonomía excepcional, donde hasta el nombre de las nuevas instancias –Junta de Buen Gobierno– evidencia que ahí no se reconoce la administración del “Mal Gobierno”. Otras comunidades autogestivas –indígenas o mestizas, urbanas o rurales– resisten en circunstancias no más difíciles pero sí más enredadas, al moverse a la vez dentro y fuera del sistema, confrontando al gobierno pero negociando con él. El espíritu rebelde puede ser el mismo, pero el modo es otro.

La Cooperativa Tosepan Titataniske, de indios nahuatl de la sierra norte de Puebla, por ejemplo, promueve la conversión productiva sustentable y opera el procesamiento y comercialización de café, miel y pimienta orgánicos, pero también se ha ocupado de la infraestructura caminera y eléctrica de la región, así como de abasto, salud, educación y cultura, al tiempo que reivindica los derechos democráticos de la ciudadanía en su modalidad plebiscitaria propia de una zona indígena.

La Tosepan es pues un notable ejemplo de organización autogestionaria, que sin embargo demanda y opera programas públicos, interactuando cotidianamente con el gobierno local, estatal y federal.

Es también una organización económica de productores de café, y como tal forma parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOO), que es miembro del Movimiento “El campo no aguanta más” (MCAM), y en ese carácter marchó el 31 de enero en la ciudad de México, negoció con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para el Campo, y lo firmó. Además forma parte, con el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), El Barzón, y otras, del Frente Sindical Campesino y Social para impulsar la soberanía alimentaria, el empleo, la vida digna y el desarrollo sustentable en el campo y la ciudad, conformado en enero de este año; y después de encontrarse con organizaciones agrarias centroamericanas para debatir el Plan

Puebla-Panamá, impulsó la convergencia multinacional Movimiento Indígena Campesino Mesoamericano (Moicam), fundada en el mes de agosto en Tegucigalpa, Honduras. Recientemente la Tosepan inauguró con fiesta un centro de encuentro, educación, capacitación y cultura llamado Kaltaixpetaniloyan (La casa donde se abre el espíritu), que es una suerte de Caracol poblano, pese a que proviene de una vieja iniciativa propia y la sede se edificó con trabajo de los socios, pero también recursos públicos. Y así, no puras sino contaminadas, no monolíticas sino híbridas y entreveradas, son casi todas las autonomías realmente existentes; así y de muchas otras maneras resisten en rebeldía los que habitan sierras distintas de las chiapanecas. Porque el mundo que queremos y construimos es un mundo donde caben muchos mundos, un mundo donde lo diverso es virtuoso y la fuerza nace de las diferencias.

Por su forma –que no por su espíritu– las autonomías chiapanecas son excepcionales. Y también debieran ser transitorias, porque quienes demandamos una “paz digna en Chiapas” pretendemos que el EZLN pueda continuar su lucha sin necesidad de armas y también abolir definitivamente el cerco político-militar que aprisiona a sus bases civiles, que así podrían seguir resistiendo como las demás comunidades, con un hostigamiento menos extremo. La rebeldía zapatista es ejemplar, pero paradójicamente al apoyarla no buscamos que todas las regiones indígenas se mimeticen con el “comunismo de guerra” de Las Cañadas, sino que los municipios autónomos de Chiapas puedan salir del cruel estado de excepción donde los tiene la pasmada guerra del sureste, y luchar como los demás: con un pie en la institucionalidad sistémica y otro fuera.

Cambio de rumbo

La inauguración de Caracoles y Juntas de Buen Gobierno puede verse también como el revire zapatista a la torpeza del legislativo y a la derrota que sufrimos hace casi tres años las fuerzas democráticas y progresistas del país cuando creímos poder hacer constitucional la Ley Cocopa y reanudar las negociaciones para una paz justa en Chiapas, con movilización popular y una coyuntura donde Fox y su partido necesitaban inaugurar la gestión destrabando la guerra congelada, movimiento al que tendría que sumarse parte del priismo. No pensamos entonces que el PAN decidiera mostrarle a su presidente quién manda en el legislativo mediante una alianza coyuntural con el PRI, que además fue ideológica, pues ambos son racistas. Esto nos derrotó, no la “traición de la clase política” en general, ni menos de la ínfima bancada perredista del senado, cuyo voto a favor en lo general hundió en el descrédito a su partido, pero resultó tan irrelevante para los saldos duros como el voto en contra de la diputación del PRD. En esta batalla perdimos dos cosas: la plena constitucionalidad de los derechos indios, y la pronta pacificación de Chiapas.



© David Rosales

Porque llevar a la constitución la Ley Cocopa tiene –o tenía– dos caras: el reconocimiento de un derecho indígena, y el cumplimiento de una de las tres señales demandadas por el EZLN para reanudar el diálogo de paz. Al frustrarse perdimos todos, pero en la primera vertiente perdieron directamente los pueblos originarios, mientras que en la segunda perdió el EZLN, forzado al pasamontañas y las cananas, y perdieron las comunidades en resistencia, condenadas al cerco y la penuria, a “sobrevivir en condiciones de persecución, hostigamiento y pobreza que pocas veces pueden encontrarse en la historia del mundo”, como escribió Marcos.

Respecto de lo primero, el reconocimiento como derecho, el CNI respondió desde hace más de dos años con la decisión de seguir demandando el cambio constitucional, al tiempo que las comunidades ejercen las autonomías de hecho, amparadas en los Acuerdos de San Andrés, pero también en el Convenio 169 de la OIT, del que México es firmante. En lo tocante a la segunda vertiente, el reconocimiento como signo de buena voluntad que abriría paso a una paz digna en Chiapas, el EZLN no ha retirado la demanda de “tres señales” para reanudar el diálogo, pero de hecho asume que las puertas están cerradas: “En nuestro país, la clase política mexicana (donde se incluyen todos los partidos políticos con registro y los tres Poderes de la Unión) traicionó la esperanza de millones y millones... de ver reconocidos constitucionalmente los derechos y la cultura de los pueblos indios”. Y saca las conclusiones pertinentes: “El EZLN decidió suspender totalmente cualquier contacto con el gobierno federal mexicano y los partidos políticos, y los pueblos zapatistas ratifican hacer de la resistencia su principal forma de lucha” (Comunicado del CCRI-CG EZLN, 19 de julio de 2003).

Cuando el EZLN condicionó reanudar el diálogo a que la Ley Cocopa se incorporara a la Constitución y Fox presentó la iniciativa pero el legislativo aprobó una caricatura, que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación no invalidó, quedó entrapada la paz, pues a los integrantes de la cámara de origen les quedaban casi seis años, de modo que en el sexenio íntegro del presidente Fox no se cumplirá la principal de las “tres señales”. En estas condiciones, es lógico que dos años después el EZLN suspenda “cualquier contacto con el gobierno federal”, reivindique su “derecho a expresar solidaridad con las luchas justas” (es decir, a hacer política nacional y planetaria), y que las comunidades zapatistas se atrincheren para resistir el cerco por un buen rato. Pero las nuevas posiciones van más allá de un reacomodo táctico, constituyen una rectificación estratégica respecto de las sostenidas durante siete años.

Quienes con la Convención Nacional Democrática (CND) apostaron a las elecciones como vía a un “gobierno de transición, un nuevo constituyente y una nueva constitución”; quienes en los Diálogos de San Andrés iniciaron una negociación de amplio espectro con el gobierno; quienes emprendieron la Caravana de la Dignidad para que los legisladores incorporaran los derechos indios a la Constitución; el ejército que eligió la paz y la participación social como vía para impulsar reformas... hoy consideran que todas las “puertas” están cerradas. Los que en 1994 vieron en el voto una palanca democrática, en 1996 creyeron útil negociar los grandes problemas nacionales con el gobierno y en el 2001 confiaron en que los legisladores aprobarían los derechos indios, en el 2003 renuncian por completo a las vías e instancias institucionales, descreen del diálogo con el poder, decretan la obsolescencia de los partidos, pronostican el colapso del sistema político y se anclan en la resistencia rebelde. Es su derecho. Pero no pueden esperar que todos quienes los acompañaron durante los últimos nueve años se sumen, así nomás, a la nueva estrategia. En todo caso, ponderar la década y sacar conclusiones es tarea compartida, pues no sólo el EZLN protagonizó la lucha, también millones de ciudadanos sueltos y cientos de organizaciones sociales y políticas.

Fin de siglo

Mi balance de la década lo esboqué hace meses en un artículo publicado el 11 de enero de 2003 en el diario *La Jornada*, texto del que Marcos criticó mi defensa a la política que también se hace “desde arriba” y una inexistente apología del PRD, descartando el resto por “frívolo”. Un año después sigo pensando lo mismo, de modo que ofrezco una versión actualizada del texto, como aportación al debate sobre los destinos del zapatismo y de la nación.

El 2003 comenzó en tono mayor: en San Cristóbal de Las Casas veinte mil zapatistas ratificaban la vigencia de su causa, mientras en el puente internacional de Ciudad Juárez

el movimiento bautizado *El campo no aguanta más* repudiaba de nuevo el capítulo agropecuario del tratado comercial de América del Norte. Vamos para una década tanto del EZLN como del TLCAN, y los pendientes del país parecen los mismos. Pero en verdad los mexicanos somos otros. En este lapso la terquedad ciudadana sacó al PRI del gobierno, haciendo presidente a un Vicente Fox mimetizado con el cambio. Y esta misma ciudadanía hoy lo deserta paulatinamente. Paradójicamente, desde hace tres años estamos luchando contra los cambios del gobierno del cambio. La plena apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la inversión privada ha sido frenada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y otras organizaciones sociales que animan el Frente Nacional Contra las Privatizaciones; la reforma fiscal centrada en cargar el IVA a los básicos y las medicinas fue abuchada por la ciudadanía y detenida por los diputados de oposición; la nueva Ley Federal del Trabajo, impulsada por el secretario Abascal, el sindicalismo “charro” y los patrones, está siendo resistida por gremios independientes como los de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); la política de desnacionalización económica y sumisión acrítica al TLCAN es repudiada por algunos empresarios grandes, todos los pequeños y lo que queda del campesinado; el Plan Puebla-Panamá, punta de lanza del ALCA, ha sido cuestionado por gremios, partidos, gobiernos locales, ONGs, académicos y periodistas; la alianza estratégica con el gobierno estadounidense choca con la proverbial y fundada desconfianza de los mexicanos en un poder que ambiciona nuestros energéticos, maltrata a los “mojados” y quiere embarcarnos en sus guerras.

Y con la resistencia se va delineando la propuesta: reformas al sistema energético en la línea de ponerlo al servicio de las prioridades nacionales, cambios fiscales progresivos que incrementen la captación y disminuyan la dependencia respecto de la renta petrolera, una ley del trabajo que tutele los derechos laborales propiciando la democracia e independencia de los sindicatos, estrategias de desarrollo nacional e integración regional socialmente comprometidas y atentas a nuestras prioridades, políticas agrarias filocampesinas que restablezcan la seguridad alimentaria. El conjunto de estos planteamientos alternos, esbozados por legisladores, partidos, uniones obreras, frentes campesinos, ONGs, y académicos, conforma el borrador de un proyecto de país donde la justicia económica y social sea soporte de la democracia política.

Al hacerse efectivo el sufragio, se comenzó también a desmontar el sistema autoritario. Pero que el PRI haya perdido la presidencia y se haya moderado el uso de la represión política no son los únicos avances libertarios. Otro gran paso es que los “chilangos” del Distrito Federal –casi diez millones de mexicanos hasta hace poco cívicamente minusválidos, pues el jefe del poder ejecutivo federal nombraba al regente de la Ciudad– conquistamos por fin nuestros derechos autonómicos. Y los inauguramos de manera ejemplar escogiendo como primer Jefe de Gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas, emblema de

los nuevos combates por democratizar el orden político, y en la siguiente votación eligiendo a otro perredista, López Obrador, hoy por hoy el político mexicano mejor calificado por la opinión pública. En cambio, otros diez o quince millones de mexicanos siguen con sus libertades disminuidas: pese a que desde hace más de diez años la lucha indígena tiene al país



en vilo, aun no se han reconocido constitucionalmente sus derechos. Ascendentes desde los preparativos del 500 aniversario del proverbial encontronazo, las reivindicaciones étnicas son emblema del EZLN desde 1996, cuando encabezan la agenda de los Diálogos de San Andrés, y en el 2000 le dan contenido a la Caravana por la Dignidad Indígena, la más extensa e intensa campaña social por reformar el estado en la historia moderna de México, un inaudito esfuerzo ciudadano por la justicia y la paz. No ha sido en vano: las comunidades recuperaron autoestima, con frecuencia ejercen de facto la autonomía, y con ellas los mexicanos nos reconciamos con la mitad más profunda y lacerada de nuestra herencia. Pero los derechos aun no son constitucionales, y en Chiapas, la guerra, pasmada pero cruenta, continúa.

Durante los últimos nueve años la política mexicana está marcada por la presencia, estentórea o silenciosa, del EZLN: la última insurrección indígena del ciclo que arranca en el XIX y la primera revuelta anticapitalista de nuevo milenio. Pero los alzados de Las Cañadas son también –quizá hasta para ellos mismos– una incómoda paradoja: un ejército que eligió la paz, una fuerza política que rechaza la política, luchadores contra el mal gobierno que no quieren el gobierno, revolucionarios radicales impulsores de reformas: un persistente oximoron. A mi entender, el EZLN ha convocado tres campañas nacionales mayores, con apuestas fuertes y que contenían una vía de pacificación: en 1994, con la CND, buscó comprometer al candidato Cuauhtémoc Cárdenas y su corriente con una vía mexicana a la democracia y la justicia que pasaría por un gobierno de transición, un nuevo constituyente y una nueva constitución. Pero perdimos las elecciones y reventó la Convención. En 1995 y 1996 invitó a una incluyente convergencia social que, con base en la agenda del Diálogo de San Andrés, debía diseñar un proyecto libertario de país y paralelamente negociar las reformas con el poder ejecutivo federal en presencia coadyuvante del legislativo. El proyecto de Ley Indígena fue un enorme primer paso, pero sabotado por el presidente Zedillo, quien no conforme con incumplir lo acordado pateó

la mesa y a punto estuvo de reanudar la guerra. Finalmente, en el 2000, llamó al CNI y todas las fuerzas progresistas del país a una gran movilización por el reconocimiento constitucional de los derechos autonómicos. La caravana logró una enorme convocatoria, tanto social como mediática, y la voz de los indios se escuchó en el castillo legislativo de San Lázaro. Pero la mezquindad de senadores y diputados dio al traste con el intento y el CNI entró en una crisis, no atenuada por su anticlimática apelación al poder judicial (quien por fortuna decidió no intervenir, pues sería muy mal precedente el que un puñado de vetustos magistrados de la Suprema Corte, conservadores por naturaleza y que ocupan el puesto por designación, le enmendara la plana al legislativo –un poder después de todo electo y plural– en su calidad de constituyente permanente).

Impulsar la transición a la democracia y la equidad cuando Cárdenas y el pueblo ganaran las elecciones, sentar al gobierno a negociar la agenda de un México libertario y justiciero, convencer a senadores y diputados de que más les valía aprobar la Ley Indígena, fueron las sucesivas estrategias de tres poderosas y brillantes campañas por las causas más legítimas del pueblo mexicano. Despliegues de imaginación, de ideas y de personas, que conmovieron al país y lograron mucho, pero no sus propósitos expresos. Y al no alcanzarlos tampoco le permitieron al EZLN bajarse del caballo transformándose por vía negociada en fuerza social y política de pleno derecho. Tres intentos tres. Tres asaltos al cielo, tan generosos y estimulantes como frustrados en lo tocante a sus objetivos.

Para mí, el saldo más infausto de los tres tropiezos es el sufrimiento prolongado de las bases de apoyo zapatistas, comunidades laceradas de siempre que desde hace casi diez años resisten tanto el cerco militar, policiaco y paramilitar como el desarrollismo contrainsurgente; comuneros indoblegables que se rascan con sus propias uñas, entreverados con indígenas tan pobres como ellos pero que han decidido no rechazar los programas del gobierno. Y si la colindancia de territorios zapatistas y no zapatistas se antoja difícil, el entrecruzamiento –la íntima convivencia de credos y militancias diversos, a veces enconados– genera dolorosos conflictos que cruzan la milpa, la huerta, el potrero, la hamaca. Hay que hacer que se cumplan las tres condiciones del EZLN y se abra el camino de la paz. Es por las comunidades en resistencia, es por los pueblos indios, es por los mexicanos todos. Es por su dignidad y por la nuestra.

El mismo 1ro de enero que inspira este balance, Luiz Inácio Lula da Silva tomaba posesión como presidente de Brasil, habiendo ganado con el 61% de los votos gracias a una convergencia de gremios combativos, como la Central Unitaria de Trabajadores y el Movimiento de los Sin Tierra, con empresarios progresistas como el propio vicepresidente; de partidos populares, como el Partido de los Trabajadores, con institutos políticos centristas; de ONGs, intelectuales y artistas, con la iglesia católica libertaria. Fuerza poderosa cuanto variopinta imposible de construir sin el buen desempeño del PT en el

***“Durante
los últimos nueve
años la política
mexicana
está marcada
por la presencia,
estentórea
o silenciosa,
del EZLN:
la última
insurrección
indígena
del ciclo
que arranca
en el XIX
y la primera revuelta
anticapitalista
de nuevo milenio”***

legislativo y al frente de importantes gobiernos locales. Ya lo dijo Lula en su toma de posesión: esto no es producto de las elecciones sino de una larga lucha. Sería estúpido empezar a buscarles cara de Lula a nuestros políticos progresistas. No lo es, en cambio, mirarnos en el espejo de una izquierda con identidad pero incluyente, que a partir de sus propias bases y su propia definición política ha sabido sumar fuerzas y combinar métodos de lucha. Porque en México —está visto— no le abriremos paso a la paz en Chiapas mediante el reconocimiento constitucional de los derechos indios, si no es con un gran movimiento que englobe lo sustancial de los actores y demandas populares. Como tampoco los campesinos, si se quedan solos, lograrán la revisión fructífera del capítulo agropecuario del TLCAN y de la política rural; ni los obreros detendrán el proyecto regresivo de Ley Federal del Trabajo, y menos impulsarán uno avanzado, si no buscan apoyos en el resto de la sociedad; ni se conservará la soberanía sobre los recursos estratégicos del país, que no es asunto sólo del SME o del Frente contra las Privatizaciones, sino de todos los mexicanos.

Para rescatar de la derecha la mayoritaria voluntad de cambio, seguir frenando las contrarreformas e impulsar la transformación democrática y justiciera del país, es necesario trabajar desde abajo pero también desde arriba. Actuar a través de movimientos sociales y de partidos políticos, cuestionando al poder y ejerciéndolo dentro y fuera del gobierno, demandando reformas legales y legislando, resistiendo y proponiendo. Dos ejemplos: la Ley Cocopa y la Reforma Política de la Ciudad de México, que deben reconocer los plenos derechos ciudadanos de unos 25 millones de compatriotas entre indígenas y chilangos, una objetada por presuntamente balcanizadora y la otra por la supuesta incompatibilidad territorial de gobierno local y federal, toparon con pared en el legislativo, particularmente en el Senado. ¿Cuál es la lección? ¿Que el Congreso es incorregible y las leyes no sirven para nada o que necesitamos legisladores identificados con los intereses populares? Porque no podemos exigirle

a las cámaras que aprueben nuestras iniciativas de ley, que orienten el gasto público a los intereses nacionales, o que preserven la soberanía de nuestra política exterior, sin preocupamos también por llevar a ellas congresistas expresamente comprometidos con la agenda democrática y justiciera. Y éste no es asunto exclusivo de los partidos, sino de todos los mexicanos. Lo otro es retomar la consigna de los argentinos más desilusionados: ¡Que se vayan todos!... cuando de hecho en las muy concurridas elecciones que ganó Kirchner la gente votó porque regresaran algunos.

En 1994 el EZLN buscó la transición del país a la democracia y la justicia apoyándose en la campaña electoral cardenista y la izquierda plural pero inorgánica de la Convención. El sistema hizo trampa, pero también es verdad que el pueblo siguió votando por el PRI. En 1995 y 1996 el EZLN convocó a todos los actores democráticos a debatir la agenda nacional en unos Diálogos de San Andrés que a la postre fueron saboteados por la contraparte gubernamental. Por último, en el 2000 llamó a impulsar la reforma del Estado en lo tocante a los derechos indios, mediante el debate, la movilización popular y el llamado a la conciencia de unos legisladores que resultaron torpes y mezquinos. ¿Se cerraron para siempre esas puertas? No lo creo. Sin duda en el mundo de la globalización salvaje los estados nacionales están muy acotados, y en México el sistema político está en crisis. Aun así, creo que las reformas democráticas deben empujarse desde abajo y desde afuera, pero igualmente con presencia y acuerdos en el legislativo; considero que el programa del otro México posible demanda un incluyente debate con todos los actores sociales, pero debe ser retomado e impulsado también por los partidos políticos; y creo que la transición a un país más justo —que no la simple alternancia— es tarea pendiente que no empieza ni termina en las elecciones, pero sin duda pasa por ellas. Y para sacar adelante todo esto no hace falta encontrar culpables en nuestras propias filas o satanizar presuntos traidores, hace falta sumar.

Posdata

Doce meses después de haber escrito este balance, puedo decir que el 2003 comenzó, continuó y terminó en tono mayor.

La decena escasa de ateridos líderes agrarios que protestaba en el Puente internacional de Ciudad Juárez se transformó en menos de treinta días en un enorme movimiento nacional capaz de llenar el Zócalo de la capital con cien mil campesinos provenientes de toda la República; capaz de forzar la incorporación de todas los agrupamientos agrarios nacionales, priistas incluidos; capaz de formular y consensuar una propuesta de reforma rural integral, sostenible y para el largo plazo que constituye un programa campesino

estratégico; capaz de convocar la movilización solidaria de los gremios obreros más combativos; capaz de llevar el campo al horario AAA de las televisoras y al centro de la problemática nacional; capaz de imponer al gobierno la negociación de toda la agenda agraria y de obtener un limitado Acuerdo Nacional para el Campo que sin embargo reconoce la emergencia rural y nacional, proclama la soberanía alimentaria y plantea la necesidad de sacar del TLCAN el maíz blanco y el frijol.

La primera oleada del nuevo movimiento campesino mexicano terminó en abril. Pero de inmediato retomaron la estafeta los obreros, que en la segunda mitad del año intensificaron las movilizaciones contra la política anti-popular del presidente Fox, en particular la entrega del sector energético a las transnacionales mediante la privatización descarada o sigilosa de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pero también del intento de aprobar una reforma patronal y anti-obrera a la Ley Federal del Trabajo, y la pretensión de imponer una reforma fiscal regresiva, que al reducir el ISR [Impuesto sobre la Renta] e incorporar al IVA alimentos y medicinas, aligera la contribución de los ricos y aumenta la de los pobres.

Las sucesivas movilizaciones culminan el 27 de octubre con una gigantesca marcha en la capital del país, con réplicas importantes en una decena de estados de la República, cuya importancia no está sólo en los más de cien mil manifestantes, sino en que supone la alianza de las convergencias sindicales más significativas, FSM [Frente Sindical Mexicano], UNT y algunos sectores disidentes del oficialista Congreso del Trabajo, con las más importantes agrupaciones campesinas, Movimiento El campo no aguanta más y El Barzón, además de numerosas organizaciones de otros sectores, entre las que destaca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Actores que en su mayoría convergen en una gran Convención obrera, campesina y popular, inédita tanto por el número y representatividad de los participantes como porque la pluralidad de las posiciones no impide el acuerdo en lo fundamental: detener la política neoliberal del gobierno e impulsar reformas democráticas y justicieras, en la tesitura de la soberanía popular.

En diciembre, las insurgencias que nos tuvieron en vilo todo el año se condensaron en una lucha importante por lo que estaba en juego, y decisiva por lo que representaba políticamente: la definición en el legislativo de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el 2004. La propuesta de Fox, apoyada por el PAN y por la coordinadora de la bancada priista en la Cámara de Diputados, era la expresión más clara del reformismo neoliberal y sintetizaba en términos fiscales y presupuestales todo aquello por lo que obreros y campesinos protestan en las calles. Pero la decisión estaba en manos de la malhadada "clase política", es decir, las fuerzas partidistas representadas en el Congreso de la Unión. El 11 de diciembre, la propuesta que dramatizaba la debutante y

ominosa alianza entre el PAN y el PRI fue derrotada por una inesperada convergencia del PRD con una fracción mayoritaria de los diputados priistas que se negó a respaldar la política del gobierno. Más allá de la enconada lucha por el poder en el PRI, es evidente que el rechazo de la mayoría de sus diputados al IVA en alimentos y medicinas, como el rechazo de la mayoría de sus senadores a la privatización de la electricidad, responde a las multitudinarias insurgenias populares, que evidencian el ingente costo que para cualquier partido significa respaldar la política de Fox. Así, el 11 de diciembre no sólo ganó el PRD –consistentemente opuesto a la política foxista– y ganó la corriente priista que circunstancialmente rompió la alianza con el PAN; ganaron también los miles de obreros, campesinos, maestros, colonos y estudiantes, que esperaban el desenlace en la calle; ganó la Convención obrera campesina y popular, cuya persistente insurgenia se ha transformado en referente imprescindible de todas las fuerzas políticas del país.

El mitin a las afueras del bunker legislativo con que los manifestantes recibieron a los 30 diputados del PRD que salieron a informarles el desenlace es emblemático de una realidad política emergente e inédita entre nosotros: la acción concertada de los gremios y los partidos, la convergencia del movimiento social y la acción política institucional, de la lucha en las calles y el combate parlamentario, de la resistencia abajo y arriba, fuera y dentro.

Los combates sociales y políticos de los últimos meses son inéditos por su intensidad y trascendencia, pues en ellos no se juegan las reivindicaciones de un sector sino los grandes intereses nacionales. No es una batalla de ángeles contra demonios –que no existen– sino de los pecadores e imperfectos protagonistas realmente existentes. Pero no es una lucha que se pueda soslayar, pues en ella se juega el destino del país. Resulta preocupante, entonces, que mientras esto sucede en calles y campos, el zapatismo esté enfrascado en la celebración de los diez años del estallido y veinte de que se fueron a la selva. Una jubilosa exaltación de la lucha libertaria y justiciera, que resultaría más plausible si no fuera acompañada por un persistente silencio respecto de realidades políticas que no pasan por Las Cañadas.